



Ya me cansé...de tanta muerte

Política Nacional, 13/11/2014



¿A quién hay que culpar? ¿A los criminales que mataron y quemaron a los 43 normalistas de [Ayotzinapa](#)? ¿Al gobierno federal? ¿A Ángel Aguirre, José Luis Abarca o el PRD? ¿A ese gran sector de la sociedad que sigue pensando que en México no pasa nada y la crisis humanitaria es un mito? ¿O a toda la población en general que no hemos sido capaces de exigir, obligar y condicionar a todas las autoridades a que cumplan con su deber y si no pueden, que se larguen?

El caso Ayotzinapa ha puesto en evidencia la crisis que vive el estado de derecho en México. Es una crisis política y moral. **Política** porque ya se comprobó que la alternancia ha sido simplemente una triste ilusión. Ninguna fuerza ni ningún partido político, ha sido capaz de revertir la desconfianza, hastío y desesperanza que tiene un enorme sector de la sociedad en materia de seguridad y justicia.

Moral, porque los gobernantes –y vuelvo a repetir, de cualquier partido y color- han seguido el modelo de corrupción que parece ser su fórmula de éxito. Ahora, muchos de los gobiernos locales y estatales, están corrompidos por el crimen organizado y se han convertido en el socio perfecto para que los delincuentes puedan manejar a su antojo a los encargados de las policías e instituciones de justicia, los presupuestos públicos y hasta los recursos naturales –que se suponen- son de todos los mexicanos.

Esto ha provocado que un grupo de criminales tengan el poder para secuestrar a 43 estudiantes, asesinarlos, quemarlos y desaparecerlos nada más porque ellos creían que “eran contras y trabajan para otro grupo”.

¿Pero por qué pueden hacer esto con toda libertad? Porque están simple y sencillamente por encima de ley, protegidos por esos gobernantes corruptos que en lugar de buscar el bien común, están sujetos –algunos por elección propia y otros obligados- a las decisiones de los criminales.

Muchos teóricos no aceptan el uso del concepto “Estado Fallido” para la actual situación que vive México; sin embargo, algunos estados del país se han convertido en “Estados frágiles” ya que son incapaces de garantizar seguridad y estabilidad, además de que han perdido el “monopolio legítimo de la violencia”, como lo señala Max Weber.

Ante este escenario, Ayotzinapa es la mejor muestra –pero no la única- de que la justicia, el uso legítimo de la violencia y la lucha por los territorios, están en manos de algunos criminales a través del gobierno mismo.

Una aberración teórica, pero no se puede explicar de otra manera el hecho de que los encargados de los despachos locales en materia de seguridad, justicia e incluso del poder ejecutivo mismo, obedezcan órdenes y cuiden los intereses de los criminales y no de la sociedad misma.

Pero Ayotzinapa también es el motivo que necesitaba la sociedad para expresar un “Ya me cansé” –como bien lo dijo Murillo Karam- ante las acciones gubernamentales que son reactivas y no preventivas. De nada sirve buscar a los desaparecidos, si lo

importantes es evitar que desaparezcan. El saber cómo los mataron no ayuda en nada, porque el hecho real es que no los tendrían que haber matado.

No funcionan las estrategias de seguridad. Se sacó al ejército a las calles y se desató una guerra, que según el auto exiliado presidente anterior, era para frenar que los criminales siguieran corrompiendo las instituciones de gobierno. Al parecer todo esto fracasó.

Se han detenido o están muertos las cabezas más visibles de Los Zetas, Los Beltrán Leyva, Los Arellano Félix, de los Carrillo Fuentes, Cártel del Golfo, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Otros líderes de grupos emergentes como Guerreros Unidos o Jalisco Nueva Generación han sido asegurados e incluso el famosísimo "Chapo" Guzmán está preso; y sin embargo, nada de esto ha propiciado que la violencia disminuya o que las células de estos grupos pierdan fuerza.

Y lo peor de todo, es que ni las detenciones, las sentencias o las extradiciones han impactado en los delincuentes para frenar sus actividades por miedo a las represalias judiciales que pueden tener.

Operan con la mayor impunidad a sabiendas de que una detención no frena su poder e incluso, con astucias o vacíos legales, pueden salir libres porque el estado se equivocó a la hora de mostrar pruebas o porque sus "derechos fueron vulnerados". Incongruencias de nuestro México.

Por eso el enojo, la desesperación y la indignación que ha mostrado la sociedad por el caso Ayotzinapa. Porque nada de lo que ha hecho el gobierno anterior y la actual administración, ha funcionado en lo más mínimo para reducir la violencia y los abusos en contra la sociedad civil, perpetrados por estos grupos criminales.

Ya no queremos pactos, acuerdos o "unir fuerzas en estos momentos difíciles". Queremos resultados inmediatos y sobre todo, estrategias efectivas para combatir los abusos en contra de la sociedad. Porque en ninguna circunstancia se puede justificar un asesinato, pero mucho menos se puede ignorar y dejar en el olvido a todas esas comunidades que llevan años sometidas y aterrorizadas por los criminales.

En algún momento alguien se va armar y va enfrentar a los criminales como lo han hecho las policías comunitarias y las autodefensas. Un método que ha funcionado en muchas regiones de Guerrero y al parecer en Michoacán.

Pero Ayotzinapa es y seguirá siendo por un largo rato, el caso que más ha golpeado al gobierno federal, que aunque es culpable en cierta medida, también demuestra que estamos ante el peor momento del sistema que se jacta de ser federalista, en donde muchos de los gobernadores son los grandes caciques que han permitido que sucedan casos como el de los estudiantes guerrerenses asesinados y de tantos otros casos similares, que siguen bañando de sangre todo el territorio nacional.

